EL PAIS

EDITADO POR DIARIO EL PAÍS, SOCIEDAD ANÓNIMA

PRESIDENTE DE HONOR
José Ortega Spottorno

PRESIDENTE
Jesús de Polanco

CONSEJERO DELEGADO
Juan Luis Cebrián

DIRECTOR
Joaquín Estefanía Moreira

DIRECTORES ADJUNTOS
Soledad Gallego-Díaz y Xavier Vidal-Folch

Subdirectores: Eduardo San Martín, Jesús Ceberio y Lluís Bassets. Redactores jefes: Lorenzo Romero, Martí Ruiz de Elvira (Internacional), Carlos Yárnoz (Información General), Juan Cruz (Cultura), Alex Martínez Roig (Deportes), Manuel Navarro (Economía y Trabajo) y Joaquín Prieto (Investigación). Editor gráfico: Enrique Palacios. Redactor jefe en Barcelona: Tomás Delclós. Jefes de sección: Luis Matías López (Internacional), Ángel S. Harguindey (Opinión), Juan Francisco Janeiro (Información General), Carlos Gómez (Madrid), Joan M. Pardigó (Cataluña), Maite Azcárez (Sociedad), Julia Luzán y Rosa Mora (Cultura), Luis Gómez y Emilio Pérez de Rozas (Deportes), Belén Cebrián y Andreu Missé (Economía y Trabajo), Peru Egurbide (Investigación), Javier López (Diagramación), Raúl Cancio (Fotografía), José Ramón Ariño (Cierre) y Gregorio Cantera (Documentación). EDICIÓN DOMINICAL. Subdirector: Francisco G. Basterra. Redactores jefes: Ángel Santa Cruz y Alberto Arnaut. Jefes de sección: Gumersindo Lafuente, Sol Fuertes y Eugenio González (Diagramación). SERVICIO EXTERIOR. Subdirector: Miguel Ángel Bastenier. Redactor jefe: Juan González Yusta. Jefe de edición: Ángel Luis de la Calle. EDICIÓN Y FORMACIÓN. Redactor jefe: Alex Grijelmo.

DIRECTOR GENERAL
Javier Díez Polanco

SECRETARIO GENERAL
José María Aranaz

DIRECTOR DE RELACIONES EXTERNAS
Daniel Gavela

DIRECTOR GERENTE
José Mariano Martín

Subdirector gerente: José García Miguel (Barcelona). Departamentos: Ricardo Casilles y Jaime Canals (Publicidad), Francisco Pérez Escudero (Dirección Técnica), Fernando Casas (Relaciones Laborales), José Ángel García (Financiero), Lorenzo Cristóbal y José Antoli (Circulación), Juan Carlos de Mercado (Planificación) y Ángel Gómez Anastegui (Compras).

Una oferta envenenada

A PRIMERA vista, la oferta de los narcotraficantes colombianos de desmantelarlo todo, suspender los envíos de cocaína al mercado mundial, interrumpir las hostilidades con el Gobierno y devolver a los secuestrados con tal de no ser extradidos a Estados Unidos, sugeriría que, efectivamente, los cárteles de la droga han perdido la guerra y se han rendido. Sin embargo, y con independencia de lo que finalmente decida hacer el Gobierno de Bogotá con ella, la iniciativa constituye una especie de regalo envenenado: unos asesinos que han tenido a un país al borde de la catástrofe, que han matado y corrompido sin límite, que han secuestrado, no merecen más que ser perseguidos sin descanso hasta que el último de ellos esté en la cárcel, y su organización, desmantelada; pero Colombia es un país que padece desorden y sangre desde después de la II Guerra Mundial, y es normal que allí, más que en ningún otro lugar, haya cobrado fuerza la tentación de conseguir la paz a casi cualquier precio.

Las banderías políticas que degeneraron en movimientos guerrilleros, seguidas de venganzas y brutales desestabilizaciones provocadas por ejércitos particulares de la oligarquía minera y ganadera, contribuyeron durante años a mantener el país en permanente estado de guerra civil larvada. Pero, mientras se montaban lentamente los mecanismos que encarrilaran a los extremismos políticos hacia la normalidad, el nuevo fenómeno del comercio de la droga añadía a la situación un elemento de corrupción mucho más anarquizante, que eclipsaba toda otra violencia.

La capacidad de muerte y corrupción de los narcotraficantes era tan infinitamente superior a cualquier otro de los elementos de la vida colombiana que acabó por no existir más que un método de lucha contra ellos: su extradición a Estados Unidos para que fueran castigados allí donde acaba su capacidad de chantaje. Este método de lucha no tenía nada que ver con la represión del tráfico, con el control del consumo en el mundo desarrollado o con el montaje de estériles campañas de cultivos sustitutorios; era simplemente el sistema para apartar a los criminales de un escenario en el que no era posible castigarlos.

El Estado ganó una importante batalla contra los traficantes cuando fue rechazada la posibilidad de someter a referéndum —tal como se había propuesto en una comisión parlamentaria— la decisión de extradir a los cabecillas del comercio de la droga. La consulta se hubiera convertido inevitablemente en un plebiscito en el que una población amenazada tendría que haber elegido entre los criminales o las instituciones del Estado, con la posibilidad, cierta, de que estas últimas fueran derrotadas. En el ánimo de los traficantes puede haber influido esta última derrota, pero tras la humildad que destila su propuesta se esconde la sospecha de que, tal vez, mucho de lo que allí se contiene ha sido ya negociado. El propio presidente ha declarado al referirse a la oferta que "toda guerra acaba en una mesa de negociaciones". Y es inevitable pensar que, antes de responder positivamente al ofrecimiento de los *extraditables*, los *notables* (dos ex presidentes y un político de izquierda, hombres de gran poder, inevitablemente investidos de cierta autoridad delegada por el Gobierno) hayan tenido conocimiento previo de los propósitos de aquéllos.

Del lado de los traficantes, las dudas sobre la sinceridad de sus propósitos sólo se disiparán si, antes de obtener respuesta del Gobierno, dejan en libertad a todos los rehenes y empiezan a desmantelar su aparato bélico de forma evidente. Del lado de las instituciones debería quedar claro que cualquier eventual diálogo con los responsables de tanta destrucción debe tener como límite las leyes y las reglas de juego de la legalidad republicana. Si no, el precedente establecido dejaría inermes a las instituciones democráticas frente a futuras extorsiones de éstos o de otros maleantes cualquiera. Sentado ese principio, cualquier posibilidad de alcanzar la paz debe ser estudiada sin complejos, por muy sucios que sean los motivos de los traficantes.

Moral del suceso

LA PSIQUIATRÍA oficial está logrando lo que llama *desinstitucionalización* de los enfermos mentales: sacarles a la calle y encomendarles a sus familias y a la sociedad. Éste es un hecho por el que una sociedad civilizada debe felicitarse. Los avances en la investigación médica y farmacológica permiten hoy día reducir el internamiento de estos enfermos y su reincorporación social mediante asistencia en ambulatorios. Sucesos tan angustiosos y conmovedores como la muerte de tres niños en Badajoz tiroteados por un loco o la muerte de una monja en Barbastro a manos también de un enfermo mental no invalidan este análisis. Por muy duro que resulte escribirlo, ése es un riesgo que debe asumir la sociedad a cambio de permitir la reinserción de varios otros miles de enfermos que no han agredido a nadie y a los que su desequilibrio no les impide relacionarse normalmente. Pero los riesgos deben ser siempre los mínimos posibles, y, en la situación actual en España, la realidad es que resultan dramáticamente excesivos.

Los enfermos mentales salen de los psiquiátricos sin que la sociedad les ofrezca una red de asistencia, que en su caso es vital. Muchos médicos cumplen a disgusto normas en virtud de las cuales se fuerzan las altas prematuras en los hospitales y se encomiendan los enfermos a los ambulatorios, a los cuales no acuden (muchos de ellos no reconocen su enfermedad y las familias no tienen forma legal ni física de conducirles a ellos) o acuden sin resultado de cura o, por lo menos, lenitivo. Por lo demás, ese principio que aún defienden grandes profesionales tiene un lado menos limpio: el enorme ahorro que supone para la medicina pública la supresión de camas, hospitales y personal, sobre todo ante un número creciente de enfermedades mentales y por la asimilación de la drogadicción a esas enfermedades. Amparadas por fines supuestamente morales, las disposiciones y normas se acogen en la Administración con entusiasmo.

En estos momentos, un internamiento forzoso sólo puede realizarse por orden judicial; el juzgado de guardia suele remitir la solicitud a primera instancia, desde donde se envía a un forense, no siempre especializado en enfermedades mentales, que suele atender, afortunadamente, las indicaciones del psiquiatra que atiende al enfermo, si lo hay. En esos días, el enfermo psiquiátrico puede estar pasando sin atención una crisis grave que quizá le deteriore definitivamente. La policía no puede intervenir —ni entrar en la casa donde está el enfermo— sin orden judicial ni las ambulancias trasladarle. Y las ambulancias pueden negarse a hacerlo por razones de riesgo: algunos enfermos se han escapado o se han suicidado.

En las instituciones —públicas o privadas—, las estancias no suelen durar más de 15 días; en cuanto hay un período de calma se da el alta. Ningún médico ha advertido a los familiares de un enfermo dado de alta, en quien veían un peligro inminente, de los riesgos latentes. Pero tal caso terminó en suicidio días después, y tal otro, en agresiones a personas; otros —sin duda los menos— concluyen en sucesos sangrientos. Los homicidas irán a parar a los psiquiátricos penitenciarios, cuya capacidad para ofrecer el tratamiento médico adecuado puede considerarse muchas veces como inexistente. El director de uno de ellos ha explicado que sus internos han llegado a él ya sin remedio por la falta de atención en otros centros.

Estamos entonces en una lógica circular. Miles de enfermos podrían sanar si el sistema garantiza su paulatina reintegración social; pero conviene que se sepa que el riesgo de hechos como los que motivan este comentario subsiste. Especialmente si el principio general no se acompaña de las necesarias dosis de prudencia y sentido común y de medios que no hagan descansar toda la responsabilidad en unos familiares no preparados para esta tarea.

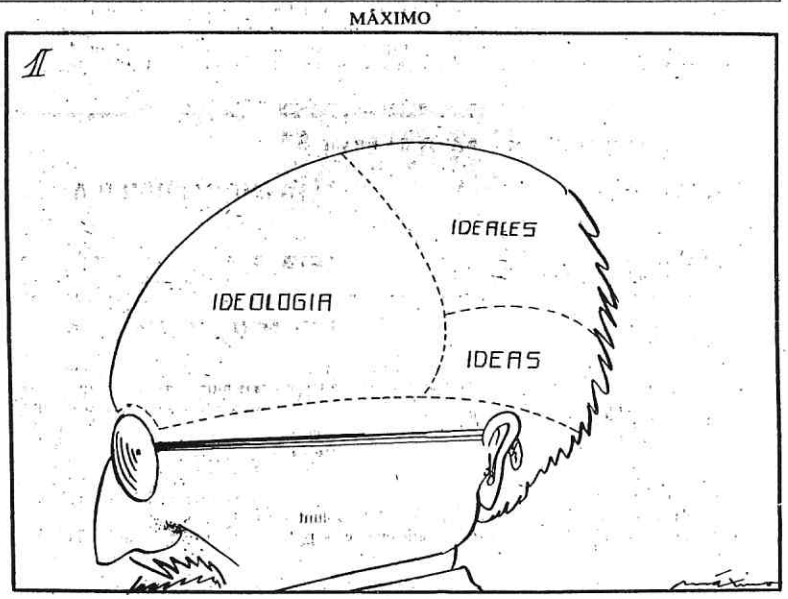
REVISTA DE PRENSA

LE FIGARO

Los límites de la 'glasnost'

El mundo occidental es como un niño. Se toma en serio las palabras que le soplan al oído y las repite como un crío aplicado. Su inocencia es refrescante. Pero, ¿es acaso una virtud? La demostración más espectacular la tenemos en las confusas informaciones sobre la crisis que sacude la República de Azerbaiyán. Como punto de partida, la ausencia de cobertura periodística norteamericana, europea o japonesa. Tras semanas de agitación, las fronteras de esta zona permanecen herméticamente cerradas, como una gran Albania. Sin duda, la intención de las autoridades es garantizar la seguridad de los periodistas. (...) Por lo tanto, *glasnost* obliga, las agencias de Prensa soviéticas y la televisión de Moscú se encargaron de informarnos: Y lo han hecho sin disimular la gravedad de los hechos. No hay mejor prueba que el siguiente titular: "Es una nueva guerra de Líbano". (...) Los medios de comunicación han repetido machaconamente este titular miles de veces. (...)

La URSS de ayer cantaba las maravillas del trigo y los tractores, los cuentos de las mil y una noches del socialismo. La de hoy dramatiza todas las dificultades que encuentra Gorbachov, el último héroe de la revolución. La primera resultó invendible, la segunda, irresistible. Después de tanto tiempo, los soviéticos conocen la receta. (...) Si la *glasnost* existe, que se abran las puertas. Si no, tendremos que enfrentarnos a uno de los mecanismos actuales de desinformación. (...)

París, 18 de enero

MÁXIMO